



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, veinticinco (25) de julio de dos mil diecinueve (2019)

Medio de control: Ejecutivo

Demandante: Ernesto Ulpiano Castro Chaparro

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Radicado: 15001 33 33 004 **2015 00123 00**

El Despacho procede a resolver el recurso de reposición presentado por la apoderada de la UGPP, contra el mandamiento de pago de fecha 27 de junio de 2019.

1. ANTECEDENTES

La apoderada de la UGPP interpuso recurso de reposición contra el auto de 27 de junio de 2019, mediante el cual se libró mandamiento de pago a favor del señor Ernesto Ulpiano Castro Chaparro y contra dicha entidad, por las siguientes sumas de dinero:

1. *Por la suma de **veintisiete millones cuatrocientos treinta y nueve mil ciento cincuenta y seis pesos (\$27.439.156)**, por concepto de pago de intereses moratorios conforme al artículo 177 del CCA ordenados en la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja el día 15 de abril de 2010, y confirmada por el Tribunal de Boyacá con providencia de 28 de agosto de 2012, dentro del proceso radicado No. 15000 23 31 000 2005 00158 00, desde el 20 de septiembre de 2012 día siguiente a la ejecutoria del fallo, al 23 de marzo de 2014, día en que se efectuó de las diferencias de las mesadas pensionales y la indexación.*
2. *Dicha suma deberá ser indexada desde el 24 de marzo de 2014, día siguiente al pago de las obligaciones, hasta la fecha en que se realice su pago efectivo.*

2. DEL RECURSO

La recurrente señaló que en la sentencia que sirve de título ejecutivo en la presente acción no se establece en forma clara y concreta la cuantía a cancelar, por lo que no contiene una obligación clara expresa y exigible y, por tanto, al no prestar merito ejecutivo, no debió librarse mandamiento de pago con base en la misma.

Añadió que la sentencia se profirió en abstracto, luego, la parte beneficiada debió iniciar incidente de liquidación por condena en abstracto, pues no es posible ejecutar la sentencia por indeterminación de la obligación, así se debió rechazarse la demanda por no tramitarse dicho incidente.

De otra parte, con base en lo dispuesto en el numeral 3.º artículo 442 del CGP, propuso las excepciones que denominó:

i) Caducidad de la Acción Ejecutiva.

Hizo referencia los términos establecidos tanto en el CCA, como en el CPACA, para que las entidades den cumplimiento a los fallos en su contra, y afirmó que después de 18 meses, en el primer caso, y de 10 meses, en el segundo, después de la ejecutoria de la sentencia empieza a correr los términos de caducidad de la acción ejecutiva.

ii) Indebida conformación del título ejecutivo.

En este aparte, la demandada señaló que no se probó la fecha en que el demandante radicó la documentación completa necesaria para dar cumplimiento al fallo, y que la acusación de intereses se suspende luego de los 6 primeros meses hasta la fecha en que se radiquen todos los documentos exigidos por la entidad, en especial, la declaración juramentada de no cobro de la obligación por vía ejecutiva.

iii) Inexistencia del título ejecutivo frente a los intereses moratorios

Aseveró que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 177 del CCA, en el presente proceso no se evidencia demora en el reconocimiento de la pensión, de manera que no hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios reclamados por la parte actora, toda vez que el demandante no presentó en forma oportuna la solicitud de pago, la cual debió radicarse dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria, conforme dispone el artículo 192 del CPACA, por lo que consideró que no hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios.

iv) No existencia de título ejecutivo idóneo para fundamentar el mandamiento de pago

Estimó que el título ejecutivo base de recaudo está constituido por la primera copia auténtica de la sentencia con la certificación de su ejecutoria, pero para demostrar la obligación incumplida, el demandante presentó la resolución por medio de la cual se dio cumplimiento al fallo y copia de la sentencia de primera instancia, por tanto a voces de los artículos 422 del CGP y 297 del CPACA, la parte ejecutante intenta demostrar los atributos del título ejecutivo, a través de

un conjunto de documentos, encaminados a integrar lo que se ha denominado un título ejecutivo complejo.

v) Inexistencia de obligación clara expresa y exigible.

Manifestó que era obligación de la parte demandante aportar los documentos que integran el título ejecutivo en original o en copia auténtica; además, señaló que la orden impartida en la sentencia que se allegó como título ejecutivo, por sí misma no presta mérito ejecutivo, dado que la obligación de reconocimiento de intereses sobre supuestos valores debidos, se encuentra condicionada a que los mismos efectivamente se causen.

En ese sentido indicó que la sentencia debe integrarse con otros documentos que permitan establecer la configuración de una obligación clara, expresa y exigible de reconocer valores debidos en favor del ejecutante, específicamente, debía aportarse el recibo de pago de las condenas impuestas a la entidad, lo que no aconteció en el presente caso.

vi) De la indexación sobre los intereses moratorios.

Aseguró que el componente sancionatorio de los intereses moratorios lleva implícita la actualización del capital, por lo que reconocer la indexación de las sumas que resulten de intereses moratorios implica atribuir una doble consecuencia a un solo hecho, razón por la cual, es improcedente su aplicación.

Agregó que frente a dicho concepto no existe una obligación clara, expresa y actualmente exigible, toda vez que no se ordenó en la sentencia base de la ejecución.

vii) De la liquidación de los intereses moratorios.

Señaló que los guarismos y conceptos por los cuales se libró mandamiento de pago, distan totalmente de las actuaciones administrativas realizadas por la entidad en lo que respecta al pago de los intereses moratorios, por lo que pidió que se revise la liquidación.

3. OPOSICIÓN

El apoderado de la parte ejecutante no se pronunció

4. CONSIDERACIONES

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no reguló el trámite del proceso ejecutivo adelantado en la jurisdicción contencioso

administrativa, si bien, se establecen normas que regulan algunos aspectos propios de esta clase de procesos, como son, por ejemplo: los documentos que prestan mérito ejecutivo, la notificación del mandamiento de pago, la competencia para conocer de los procesos ejecutivos, entre otros; el procedimiento general que debe seguir el juez no se encuentra regulado en esta Ley, por lo cual, conforme a la remisión contenida los artículos 299 y 306 de la Ley 1437 de 2011, corresponde aplicar las reglas propias del proceso ejecutivo establecidas en el Código General del Proceso.

Dicho Estatuto dispone en el artículo 430, inciso 2.º que (...)“*Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada mediante dicho recurso...*”

Asimismo, a la luz de lo dispuesto en el numeral 3.º del artículo 442 *ibídem* los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago.

Por tanto, el recurso interpuesto es procedente para refutar el título base de recaudo en lo relativo a que los documentos que lo integran conformen una unidad jurídica, emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia y, por otra parte, para alegar los hechos que configuran excepciones previas.

En lo relacionado con la oportunidad de este recurso, los artículos 318 y 319 del CGP disponen lo siguiente:

“Artículo 318. Procedencia y oportunidades. (...)

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

Artículo 319. Trámite. *El recurso de reposición se decidirá en la audiencia, previo traslado en ella a la parte contraria.*

Cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado a la parte contraria por tres (3) días como lo prevé el artículo 110.”

De lo anterior, en el caso concreto, puede concluirse que el recurso ejercido es procedente y fue interpuesto oportunamente, por lo que el Despacho procederá a desatarlo como sigue:

- Sobre la claridad de la obligación

Frente a la falta de claridad de la obligación contenida en la sentencia, el Despacho encuentra que se trata de un asunto propio del fondo del asunto, por ende, no es factible discutirlo, a través de reposición. No obstante, en gracia de discusión, se advierte que contrario a lo afirmado por la apoderada, la decisión judicial contiene la obligación clara de reliquidar la pensión de vejez del señor Ernesto Ulpiano, teniendo en cuenta los factores no incluidos en la liquidación, lo que indica que, tal como se señaló en el auto de 27 de junio de 2019, el valor, aunque no estaba determinado, sí era claramente determinable con una operación aritmética que debía realizar la entidad condenada¹; por consiguiente, en el presente asunto no era pasible de incidente de concreción de condena, por cuanto este hace referencia a cuantías que no hubiesen sido establecidas en el auto o sentencia, como por ejemplo el pago de frutos o mejoras.

- Caducidad de la acción ejecutiva

El argumento esgrimido por la entidad ejecutada no es de recibo, comoquiera que se indicó la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad, pero sin precisar datos referentes a fechas de ejecutoria de la sentencia y radicación de la demanda, adicionalmente, desconoció el análisis que al respecto realizó el Despacho al momento de librar el mandamiento de pago, en el que se advirtió que:

*“La demanda fue interpuesta dentro de la oportunidad legal que corresponde de conformidad al artículo 164 numeral 2, literal K del CPACA, por cuanto la sentencia cobró ejecutoria el **19 de septiembre de 2012** (f. r55), y una vez transcurrieron los dieciocho (18) meses de que trata el art 177 del CCA, se advierte que no operó el término de la caducidad de los cinco años de que trata la norma, pues la acción ejecutiva fue promovida el **7 de julio de 2015** (f. 70).”*

Además, al hacer el estudio de la exigibilidad del título esta Instancia Judicial estableció que como la sentencia cobró ejecutoria el 19 de septiembre de 2012, los dieciocho meses que trata la norma en mención se cumplieron el 19 de marzo de 2014; por consiguiente, al momento de presentación de la demanda, esto es, el 07 de julio de 2015, este plazo se encontraba superado, sin que hubiera caducado la acción.

¹ Para tal efecto ver, Consejo de Estado. C.P. María Elena Giraldo Gómez, auto de 16 de septiembre de 2004, radicado bajo el número 26.726.

En cuanto a las demás excepciones formuladas, este Instancia Judicial interpreta que se encaminaron a fundamentar la ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales y, en consecuencia, también serán resueltas.

- Indebida conformación del título ejecutivo e inexistencia de título ejecutivo frente a los intereses moratorios.

La recurrente cuestionó la acreditación de la fecha en que la parte demandante realizó la reclamación administrativa de cumplimiento del fallo, para efecto de determinar los intereses; sin embargo, omitió sin precisar la fecha en que, a su juicio, se efectuó la reclamación, y la forma como dicha situación afecta la conformación del título ejecutivo.

No obstante, la documental aportada con la demanda da cuenta de que el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión de Tunja remitió copias auténticas de las sentencias de primera y segunda instancia el 08 de abril de 2013 tal como se expresó en la Resolución N.º RDP 022807 de 20 de mayo de 2013 (f. 56), mediante la cual la UGPP reliquidó la pensión de jubilación del accionante, en cumplimiento del fallo judicial que ahora se ejecuta.

Lo anterior, implica que la causación de intereses no se suspendió, luego, se generaron desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia —20 de septiembre de 2012— y hasta el 23 de marzo de 2014, fecha en que, según el cupón de pago visible a folio 63, se canceló el retroactivo por concepto de capital e indexación.

- Inexistencia de Título Ejecutivo Idóneo para Fundamentar el Mandamiento de Pago e Inexistencia de una obligación clara, expresa y exigible

En lo que toca con la exigencia de copia auténtica u original del pago realizada por la entidad, como formalismo *sine qua non* para la configuración del título ejecutivo, no se encuentra respaldo legal ni argumentativo para dicha conclusión; a lo que se suma que en el caso concreto, el monto y la fecha de pago parcial se extrajeron del de cupón de pago N.º 33778 de diciembre de 2013 (f. 63).

- De la indexación de los intereses moratorios.

Frente a este aspecto, debe recordarse que el Juzgado consideró que el saldo adeudado por concepto de intereses moratorios debía ser indexado a fin de la que suma adeudada conservara su valía al momento del pago efectivo, toda vez que la moneda es objeto de devaluación constante y, por ende, se hace necesario el ajuste de su valor, para efectos de garantizar que el valor efectivamente pagado corresponda en algo al que otrora se adeudaba.

Lo anterior, en la medida que no es equitativo someter a una devaluación de la suma adeudada y de esta forma beneficiar la negligencia de la entidad demandada.

- **De la liquidación de los intereses moratorios.**

Finalmente, frente a los intereses moratorios reclamados, resulta indispensable poner de presente que el Consejo de Estado² señaló que entre los regímenes de intereses de mora contenidos en el CCA y en el CPACA hay diferencias sustanciales en relación con la tasa y el plazo para pagar; además, la actuación por medio de la cual la entidad condenada realiza el pago depende del proceso o actuación judicial que le sirve de causa, en consecuencia, la tasa de mora que aplica a una condena no pagada, oportunamente, es la vigente al momento en que se incurre en ella. En resumidas cuentas Consejo de Estado concluye que conforme al artículo 308 del CPACA se deben atender las siguientes reglas:

"i) Los procesos cuya demanda se presentó antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia también se dictó antes, causan intereses de mora, en caso de retardo en el pago, conforme al art. 177 del CCA, de manera que la entrada en vigencia del CPACA no altera esta circunstancia, por disposición del art. 308.

ii) Los procesos cuya demanda se presentó antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia se dicta después, causan intereses de mora, en caso de retardo en el pago, conforme al art. 177 del CCA, y la entrada en vigencia del CPACA no altera esta circunstancia, por disposición expresa del art. 308 de este.

iii) Los procesos cuya demanda se presentó en vigencia del CPACA, y desde luego la sentencia se dicta conforme al mismo, causan intereses de mora conforme al art. 195 del CPACA."

El presente medio de control se encuentra enmarcado dentro de la segunda hipótesis, comoquiera que la demanda se presentó cuando aún regía el CCA y la sentencia de segunda instancia se dictó con posterioridad a la entrada en vigencia del CPACA, —28 de agosto de 2012— (f. 33), luego, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 308 *ibidem*, los intereses moratorios se causaron conforme al artículo 177 del CCA.

De conformidad con lo antes expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja.

RESUELVE

² **CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Consejero Ponente: Enrique Gil Botero** Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014) **Radicación:** 52001-23-31-000-2001-01371-02 **Demandante:** Lida del Carmen Suárez y otros **Demandado:** Instituto Nacional de Vías- INVÍAS- y otro **Referencia:** Acción de Grupo

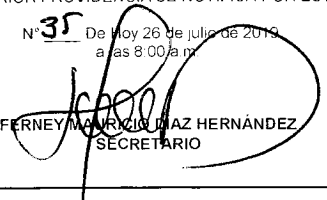
PRIMERO.- No reponer el auto del 27 de junio de 2019, según las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO.- Declarar no probadas las excepciones previas propuestas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por lo expuesto en esta providencia.

Notifíquese y cúmplase


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

CCZ

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
Nº <u>35</u> De hoy 26 de julio de 2019 a las 8:00 a.m.
 FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO

³ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 26 de julio de 2019 en la página web www.ramajudicial.gov.co.
Ferney Mauricio Díaz Hernández – Secretario